CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA PENAL TRANSITORIA R. N. N° 3449-2011
UCAYALI

Lima, trece de enero de dos mil doce.-

VISTOS: interviniendo como ponente el señor

Príncipe Trujillo; el recurso de nulidad interpuesto por el encausado Ángel Hernán Chávez Febres contra la sentencia de fojas doscientos sesenta y nueve, del veintisiete de septiembre de dos mil once, que lo condenó como autor del delito contra la libertad - violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales L.E.R.P. a diez años de pena privativa de libertad, así como fijó en dos mil nuevos soles la cantidad que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la agraviada; y CONSIDERANDO: Primero: Que el encausado Ángel Hernán Chávez Febres en su recurso de nulidad formalizado de fojas doscientos noventa y seis, solicita su absolucón; que, al respecto, sostiene que no se valoraron adecuadamente los elementos probatorios de los que no existe suficiencia para demostrar que las práctica sexual con la agraviada haya sido con violencia y amenaza; que la imputación que le formula la agraviada no es coherente pues en su relato de los hechos denunciados a expuesto una serie de datos contradictorios de cómo se encontraron y cómo llegaron al hospedaje donde mantuvieron relaciones sexuales; que en igual sentido la testigo Lucy Jacqueline Puentes Sinchi no fue coherente en sostener cómo tomó conocimiento de los hechos que denuncia su hija la agraviada; que asimismo eso imputación no fue corroborada con el Informe Psicológico de la agraviada, sobre todo si ella se negó a la realización de esa prueba. Segundo: Que, según la acusación fiscal de fojas ochenta y cinco. aproximadamente a las veinte horas del dos de agosto de dos mil seis, el encausado Ángel Hernán Chávez Febres, aprovechó que la menor agraviada de iniciales L.E.R.P. -quien tenia catorce años y cinco meses de edad, según partida de fojas sesenta y seis, pues nació el tres de febrero de mil novecientos noventa y dos- se encontraba a la altura del paradero de la Pollería el Pechugón ubicado- en la intersección de los Jirones Ucayali y Sucre de la ciudad de Pucallpa a fin de tomar la movilidad para su domicilio, y la invitó a comer, que luego la llevó al Salón de baile "Cucos" ubicado al costado del Noa Noa en la Carretera Federico Basadre, en donde le hace beber licor, que mas tarde ella al sentirse mareada solicita al procesado que lleve a su domicilio, pero en el trayecto el desvía la movilidad hacia un hospedaje en donde a la fuerza le hace ingresar a una habitación y luego mediando violencia le hace sufrir el acto sexual vía vaginal lo que le ocasiona un sangrado continuó, que posteriormente el agente activo la dejó cerca de su casa indicándole que a nadie cuente lo sucedido. Tercero: Que no son validos los agravios expuestos por el encausado Ángel Hernán Chávez Febres en tanto que la corrección de su condena emerge de la suficiencia probatoria que acredita de manera indubitable y en grado de certeza la responsabilidad penal que se le atribuye por haber cometido el delito imputado, por lo que validamente se le revirtió la inicial presunción de inocencia que le amparaba, sin haberse presentado el supuesto de ausencia de pruebas como equivocadamente lo argumenta. Cuarto: Que, es valido y legitimo asimilar como hipótesis fáctica verdadera y fiable la sindicación que la menor agraviada de iniciales de L.E.R.P. efectuó contra el procesado Chávez Febres como el sujeto que la agredió sexual mente -ver manifestación policial de fojas nueve, declaración referencial en cede sumarial de fojas treinta y tres y declaración plenarial de fojas ochocientos sesenta- en tanto que de forma inmediata y espontánea exteriorizó el rechazo a ese acto lesivo, coherentemente

narró el episodio acontecido, aportando datos descriptivos tanto de su agresor quien era un amigo, así como de las características del escenario delictual, las que luego fueron verificadas conforme se aprecia del contenido del Acta de reconocimiento de la Ficha de Registro Nacional de Identidad y Estado Civil -de fojas doce-, sin que a este efecto probatorio sea necesario mayor precisión respecto a los lugares en que transitó con el encausado ni los motivos que lo llevaron a esos lugares, en tanto la exigencia de probanza del supuesto fáctico es el dato objetivo de la norma penal -inciso tres, del artículo ciento setenta y tres del código Penal-, esto es, que con violencia se haya practicado el acto sexual con una menor de edad, transgrediendo el bien jurídico de la libertad sexual de la agraviada; que estas diligencias en su legitimidad y seguridad no ofrecen dudas en atención a la presencia del representante del Ministerio Público, quien avaló el respeto de las garantías de imparcialidad y objetividad en la investigación, que en esta imputación no se ha acreditado ni advertido sólidamente intenciones ocultas de venganza y odio que hubiesen hecho suponer que se trata de declaraciones falsas y deliberadas a fin de generar un perjuicio al encausado. Quinto: Que esta imputación con violencia tiene fundamento razonable puesto que se corrobora y consolida con el Examen Médico Legal realizado a la agraviada el tres de agosto de dos mil seis -ver fajos trece, ratificado a fojas cuarenta y dos -, que concluyó que presentaba lesión contusa leve, signos positivos para desfloración reciente con huellas de lesiones extragenitales y paragenitales; que este diagnóstico expuesto al contradictorio no perdió solidez, por el contrario se fortaleció con los alcances médicos expuestos por la otorgante de ese examen, por lo que no existe duda de la violación que sufrió la menor; que estas pruebas en sus conclusiones gozan de una presunción juris tantum de imparcialidad, objetividad y solvencia pues no fueron cuestionadas en su aspecto fáctico -falsedad- ni en el contenido técnico -inexactitud- y tampoco se aportaron pruebas o datos relevantes y no conocidos con entidad suficiente para restarle mérito, lo que es conteste con el criterio adoptado en el Acuerdo Plenario número dos - dos mil siete/CJ - ciento dieciséis; que la no realización del Informe o Pericia psicológica no incide propiamente acreditación de la materialidad del delito el que se acreditó con el examen antes evaluado, sino que su evaluación determina el grado de afectación en la personalidad psíquica de la agraviada por vivencia de un hecho traumático, por b violencia que ejerció su agresor. Sexto: Que estos elementos probatorios son congruentes y superan el examen de certeza que se precisa en el fundamento número diez del Acuerdo Plenario número dos - dos mil cinco/CJ ciento dieciséis, del treinta de septiembre del dos mil cinco, esto es, "que en la declaración de la agraviada se presente: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, b) verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que este rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria, y c) persistencia en la incriminación"; que, en tal sentido, se evidencia que en la conducta delictiva del encausado concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo, que perjudicó la libertad sexual de la agraviada -a los catorce años y cinco meses de edad-; sin que los argumentos de descargo orientados a reclamar su inocencia, en modo alguno inviertan los términos de la tesis incriminatoria. Séptimo: Que el juicio de proporcionalidad de las sanciones esta jurídicamente vinculada al conjunto de factores que el Código Penal determina para individualizar la pena, que esta no puede ampararse en criterios no aceptados por el Código Penal, que el quantum de la pena impuesta a! encausado Chávez Febres no es proporcional con la magnitud de su culpabilidad por el injusto penal cometido -previsto en inciso tres del artículo ciento setenta y tres del Código

Penal, modificado por el artículo uno de la Ley número veintiocho mil setecientos cuatro, publicada el cinco de abril de dos mil seis, que en este caso contempla pena privativa de libertad no menor de veinticinco años-; que no concurre ninguna circunstancia atenuante ni modificatoria de la pena básica, aún teniendo

en cuenta los criterios y los factores comunes y genéricos para la individualización de la sanción -previstos en los artículos cuarenta y cinco y cuarenta y seis del Código Penal, respectivamente-, sobre todo porque no aceptó los hechos probados; sin embargo en la medida que el representante del Ministerio Público no cuestionó este pronunciamiento no se puede hacer una reforma en peor del encausado en tanto sólo él habilitó la sede recursal. Por estos fundamentos: declararon NO HABER NULIDAD en la sentencia de fojas doscientos sesenta y nueve, del veintisiete de septiembre de dos mil once, que lo condenó como autor del delito contra la libertad -violación sexual de menor de edad en agravio de la menor de iniciales L.E.R.P. a diez años de pena privativa de libertad, así como fijó en dos mil nuevos soles la cantidad que por concepto de reparación civil deberá pagar a favor de la agraviada: con lo demás que contiene y es materia del recurso: y los devolvieron.-

SS.

LECAROS CORNEJO

PRADO SALDARRIAGA

BARRIOS ALVARADO

PRÍNCIPE TRUJILLO

VILLA BONILLA